

La crisis política en El Salvador (1976-1979)

RAFAEL GUIDOS VÉJAR

“...Es cierto que prever significa solamente ver bien el presente y el pasado en tanto que movimiento; ver bien o sea, identificar con exactitud los elementos fundamentales y permanentes del proceso. Pero es absurdo pensar en una previsión puramente ‘objetiva’. Quienes prevén tienen un ‘programa’ que hacer triunfar y la previsión es justamente un elemento de este triunfo, lo cual no significa que la previsión deba ser siempre arbitraria y gratuita o simplemente tendenciosa.”

Antonio Gramsci

ADVERTENCIA

El trabajo que a continuación exponemos presenta algunas reflexiones de carácter teórico general, todavía a un nivel de descripción que por su naturaleza provisional no permiten anticipar conclusiones sobre el actual proceso político salvadoreño aun cuando permiten el señalamiento de ciertos rasgos importantes que, luego de amplias discusiones, podrían dar pie para formular respuestas definitivas. Estas reflexiones surgen de un primer y apurado análisis del material empírico que recoge los hechos políticos más importantes del proceso salvadoreño entre 1976 y 1979. Nuestra primera aproximación dista mucho del análisis minucioso y exhaustivo que sería necesario para la presentación de un estudio completo y afinado. Su población obedece a la necesidad de llamar la atención de la “dirección consciente” de las fuerzas políticas que participan en el actual proceso sobre ciertos hechos que creemos, deben de ser tomados en cuenta en la búsqueda de soluciones a la crisis por la cual atraviesa la sociedad salvadoreña.

El análisis se orienta a destacar los elementos, rasgos y relaciones socio-políticos del proceso que indican, más allá de su aparente combinación aleatoria, la estructuración del fenómeno político conocido como “crisis de autoridad”¹ con las especificidades, claro está, de las condiciones históricas salvadoreñas. Aclaremos que más que una premisa valórica, *a priori*, ésta

¹ Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*, Juan Pablos, 1975, pp. 68-76.

es una conclusión luego del examen preliminar del material empírico. Tampoco tratamos de presentar un trabajo de "caracterización", que está muy lejos de nuestra orientación teórica, sino uno de ensayo de encontrar en la lógica interna de la realidad objetiva su tendencia a manifestar problemas de orden teórico que posibilitan la práctica cognoscitiva. En otras palabras, reconocemos la utilidad analítica de ciertas categorías generales (tal es el caso de "fascismo" en otros trabajos) pero no pretendemos subsumir la realidad histórica en tal categoría. De lo que tratamos es de retomar la especificidad histórica por la cual atraviesa la sociedad salvadoreña sin minimizar sus rasgos y elementos singulares. Nuestra discusión pretende girar en torno de la realidad salvadoreña más que en una categoría, en torno a un proceso real, histórico, más que en un discurso lógico.

El estudio pretende situarse entre el análisis de "situación" y el de "coyuntura". El grado de adelanto de nuestra investigación no nos permite, por el momento, definir más exactamente, si esto es posible, su ubicación. "La diferencia entre la 'situación' y la 'coyuntura' es que la coyuntura sería el complejo de rasgos inmediatos y transitorios de la situación económica, y por este último concepto habría que entender entonces los rasgos más fundamentales y penetrantes de las situaciones mismas."² Las reflexiones que aquí presentamos se derivan del conjunto secuencial de los hechos más importantes del periodo analizado, pero el corto tiempo entre la observación y análisis de los datos, debemos advertirlo sinceramente, no nos ha permitido adentrarnos con mayor profundidad en el estudio de las "mediaciones", que a veces hay que buscar en niveles de análisis distintos al que hemos elegido, que concatenan a los hechos de un proceso social.

"Las relaciones de fuerza política" es el nivel de análisis que domina a las reflexiones aquí presentadas. Los conflictos de clase aparecen en este nivel "trasmutados" como conflictos entre fuerzas concretas que tratan de constituirse como bloque de poder, es decir, que actúan en el sistema político³ desde donde pretenden activar e imponer a la sociedad proyectos de poder a través de complicados juegos de relaciones de fuerza. Las fuerzas políticas responden, entonces, a grupos sociales "portadores" de la estructura, por la cual son determinados, pero también de proyectos de acción que la sostienen o que pueden transformarla.⁴

² Antonio Gramsci, *Pasado y presente*, México, Juan Pablos Editor, 1975, p. 186.

³ "Sistema político" es entendido como "el sistema institucional complejo de tomas de decisiones, en el que una pluralidad de actores sociales gradúa la obtención de sus demandas a partir de niveles que van desde el poder efectivo para decidir, hasta la capacidad para influir defensivamente para vetar, a través de variadas formas de presión". Véase Portantiero, Juan Carlos, *Clases dominantes y crisis política en el capitalismo argentino en crisis* (Compilada por Oscar Braun), Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. Gramsci, *op. cit.*, pp. 65-68, Portantiero, *op. cit.*, pp. 73-119.

⁴ Gramsci, *op. cit.*, pp. 65-68. Portantiero, *op. cit.*, pp. 73-119.

El trabajo se divide en tres partes. La primera intenta presentar los rasgos más sobresalientes, a nivel político, de la actual situación nacional y que forman los “nudos” que intentan resolverse mediante la práctica y el enfrentamiento de las distintas fuerzas políticas que los han generado. La segunda parte consiste en la descripción de los distintos periodos a través de los cuales han avanzado los elementos que han configurado los “nudos” actuales de la problemática salvadoreña. Es una rápida descripción de los momentos y acciones más importantes que han tenido lugar durante el periodo elegido. Forma parte de una descripción más detallada que necesita ser, posteriormente, más estudiada y que no se presenta por motivos de tiempo y espacio. La tercera parte son reflexiones provisionales sobre los movimientos políticos, las relaciones de fuerzas, que se han percibido en el análisis de los datos hasta hoy recolectados.

I. EL “CLAROSCURO DEL PRESENTE”

El tenso y sangriento trimestre (mayo / junio / julio de 1979) no ha bastado para develar completamente los perfiles de una solución, “estable” y “eficiente”, a la profunda crisis que en todos sus niveles sacude violentamente a la sociedad salvadoreña. Por el contrario, en el “claroscuro del presente” es posible percibir que cada movimiento de los diversos actores políticos agudiza, cada vez más, las hondas diferencias que entre ellos han marcado sus encontrados intereses económicos, sociales y políticos. La intensa colisión de contradicciones imprime a cada tendencia de solución características de inestabilidad y de fracaso social potencial.

En lo político, plano donde se concentran, cristalizan y deciden las crisis, el convulso panorama salvadoreño presenta una morfología que acrecienta lo impredecible, la incertidumbre, de un futuro que no termina de desencadenarse. Están planteados en la escena política nacional a] un Foro Nacional en el cual un sector de la sociedad salvadoreña discute la actual “crisis económica, social, política, espiritual y cultural” del país; b] referencias a un próximo proceso electoral que tiene como fin elegir alcaldes municipales y nuevos representantes legislativos ante una asamblea dominada, en la actualidad, por partidos políticos conservadores; c] un ambiente de represión generalizada en contra de todos los grupos populares y d] una permanente agitación de los grupos populares que luchan por obtener reivindicaciones largamente postergadas en medio de contradicciones internas que obstaculizan el surgimiento de expresiones unitarias populares. ¿Qué posibilidades ante la crisis tiene cada uno de estos elementos? ¿Cuál de estas tendencias aportaría una solución a la crisis coyuntural salvadoreña? ¿Cómo pueden combinarse los elementos de la crisis

para una solución adecuada? ¿Se solucionará la crisis o, por el contrario, tenderá a intensificarse en la medida en que cada grupo presione sobre una posible solución? Describamos en forma más detenida los puntos antes mencionados:

1. El llamado e instalación, desde la segunda quincena de mayo, de un Foro Nacional por parte del Ejecutivo fue un intento de crear un ambiente de "unidad nacional" ante la crisis, sin incorporación de los grupos sociales populares que más han sido afectados por la crisis y sus consecuencias. El clima de represión y "el estado de sitio" no permitieron la asistencia de varias fuerzas políticas indispensables en la solución, aunque en el interior del Foro se produce la "reverberación" de la "voz" de estos "grandes ausentes". La no asistencia de verdaderos representantes populares a tal foro sitúa al "pueblo" en la condición de un verdadero "convidado de piedra" quien, sin embargo, a largo o mediano plazo, como en la famosa obra española, decidirá el desenlace final de la trama. El Foro, al transcurrir en un casi absoluto silencio, en un clima invariable de represión, con ausencia popular, etcétera, es percibido por los "ausentes" como una conspiración en su contra y como una evidencia de complicidad por parte de los "asistentes" con las causas múltiples que han configurado la actual situación del país. De esta manera, desde ya, sus conclusiones, resoluciones, etcétera, tienen asegurado un valor historiográfico.

2. Las constantes referencias, el gobierno comenzó a hacerlas también desde mediados de mayo, a un próximo proceso electoral, con una nueva promesa de completa libertad en su desarrollo, se define, progresivamente, como la salida política más eficaz que el gobierno propone para superar el actual "*impasse social*". La historia electoral del país, especialmente la de esta década, desdibuja las posibilidades reales de tal proceso, no obstante que varias fuerzas políticas, bajo determinadas circunstancias y condiciones, están dispuestas a demostrar que tal vía es potencialmente favorable para las aspiraciones populares. Lo cierto es que muchos cambios, desvinculados de la fantasía y la retórica, tendrán que realizarse antes de que las elecciones, campo en el cual ninguna fuerza política quiere, actualmente, definirse y atarse, se constituyan como moneda corriente en el intercambio político. Las afiliaciones masivas que sostienen a varias "organizaciones populares" que se constituyeron y definieron a partir y en contra de los procesos electorales aportan un factor imponderable y nada desestimable a esta posible solución.

3. Desde el 77 la constante actividad de los distintos grupos populares mantiene siempre dinámica la escena política, editando formas de organización y de lucha permanentemente novedosas. Pero, no obstante la combatividad de este estado general de movilización popular, sus luchas parecieran desarrollarse más en el plano "social" (luchas por reivindicaciones y de defensa organizativa) sin trascender, todavía, en una forma total al

plano propiamente "político" (lucha por el Poder). No desconocemos los vínculos y mediaciones entre ambos tipos de lucha, lo que queremos remarcar es el estado en que se encuentra el actual "movimiento popular". Si el movimiento social, bien es cierto, ha irrumpido en distintos tipos de manifestaciones concretas que expresan un alto grado de autonomía, la expresión política orgánica todavía es objeto de una búsqueda consciente. Muchas de las expresiones literario-políticas de las distintas organizaciones populares se refieren abiertamente a este tipo de búsqueda. Este estado en el desarrollo de la dirección consciente del movimiento popular apuntaría a la explicación de su fragmentación política en diversas líneas y tendencias y podría ser una de las razones que, si no impiden, por lo menos vuelven más lento el intento de generar un organismo popular modular en el interior del cual, sin perder la especificidad social y política de cada una de las organizaciones populares, se redefinan las distintas tendencias y desde donde se planteen unitariamente las reivindicaciones económicas, políticas y sociales más sentidas de cada uno de los grupos populares. No obstante esta diversificación política en el seno popular, en la actualidad se ha recomenzado, como otras tantas veces en el pasado, a establecer discusiones tendientes a lograr la unidad sobre bases que permitan mantener la independencia de cada organización (política y/o sindical) y, al mismo tiempo, la acción conjunta. En el nivel corporativo-sindical, las pasadas huelgas de solidaridad apuntan a formas unitarias de acción. Las fuerzas de desunión, por su parte, dejan sentir su importante peso cada vez que una de las organizaciones, al realizar individualmente sus actividades, recibe las embestidas de la fuerza gubernamental o de los grupos armados de derecha. Las derrotas afectan a todo el frente popular. La actual crisis de la Universidad Nacional manifiesta también crudamente la precariedad en el trabajo unitario, siendo ésta un campo donde decididos ensayos de unión, sin llegar a dañar la independencia de los grupos involucrados, podrían mostrar rápidamente las ventajas nada utópicas de la unidad. Esta unidad, lo sabemos, no es voluntaria. Es producto del desarrollo mismo del movimiento social en la búsqueda de sus expresiones propias en el plano político. En conclusión, el movimiento popular, cada vez más autónomo, consciente y motivado para adquirir cohesión orgánica, aún no ha logrado concentrar la suficiente fuerza, que se traduce y cristaliza en lo político, para aglutinar la mayoría de sectores perjudicados por el actual sistema económico y político y que le permita convertirse en alternativa inmediata de poder.

4. Los altos índices de represión y violencia en la sociedad salvadoreña sobredeterminan todos los aspectos de la vida social. El terrorífico promedio de casi cuatro muertos por día a consecuencia de actividades políticas y otro tanto o más en cuanto a amenazados, desaparecidos, torturados, etcétera, es un dato que no puede leerse alejado del clima de incertidumbre, de terror e intranquilidad en el que viven miles de hogares salvadoreños, de

su incidencia en todos los niveles de la producción misma, de su impacto en el comercio, en la vida cultural, etcétera. La iglesia católica, los partidos políticos (PDC - UDN - MNR), los "frentes" y "bloques" populares (FAPU - BPR - LIGAS, etcétera), los sindicatos, las asociaciones magisteriales y campesinas, etcétera, FUSS - FENAS - TRAS - FESINCONSTANSANDES - FECCAS - UTC y otros) todos en mayor o menor medida, han visto a sus miembros amenazados, perseguidos, exiliados, asesinados, torturados, etcétera. Campesinos, estudiantes y profesores, de distinta filiación política han sido los más afectados por la represión proveniente tanto de los cuerpos de seguridad como de los grupos armados de derecha. Los profesores asociados en "ANDES 21 de Junio", por ejemplo, ante la muerte de más de veinte de sus miembros tuvieron que decretar huelgas y paros a nivel nacional para detener verdaderos pogromos, tal como los que sufren permanentemente las comunidades campesinas y los sacerdotes católicos, y así proteger a sus asociados. Los medios de comunicación que se atreven a publicar diariamente los comunicados políticos, económicos, de protesta, etcétera, terminan, "misteriosamente", entre las llamas. Las campañas periodísticas anónimas, éstas sí en los periódicos comerciales de mayor circulación, en contra de la iglesia católica y los grupos populares, tienen una presencia permanente. La constante violación de los derechos humanos y constitucionales, que muchos grupos han tipificado como "estado de guerra", ha tenido una respuesta violenta ante la cual han caído desde comandantes cantonales, jefes de ORDEN, jefes de personal de fábricas con serios problemas laborales, hasta industriales, empresarios y altos funcionarios gubernamentales, como es el caso reciente del ministro de Educación. No obstante estos altos grados de represión, la movilización popular, en cuyas actividades se da una alternabilidad de distintas organizaciones, se mantiene siempre en efervescencia y con grandes capacidades de resistencia y denuncia. Las respuestas violentas de los grupos populares, por su parte, tampoco son lo suficientemente fuertes para detener la represión aun cuando han provocado un clima de espanto entre los grupos económicos dominantes y han logrado impactar en amplios espacios internacionales que presionan al gobierno salvadoreño para que cambie sus políticas de represión.

5. El marco económico en que se dan los acontecimientos anteriores puede caracterizarse como un proceso de monopolización que concentra los más importantes medios de producción, tanto en el campo como en las ciudades, en pequeños y cerrados grupos sociales. Partimos de este dato⁵ que determina, en última instancia, la estructura productiva del país, lo mismo que sus aspectos sociopolíticos, para señalar la gravedad con que

⁵ Véase "El Salvador, informe económico y social, 1978." (Informe gubernamental, mimeo), o "The World Bank, 1978. Economic Memorandum on El Salvador". (Mimeo.)

se presentan los rasgos económicos coyunturales que a continuación detallamos en forma sucinta:

1. Un enloquecido proceso inflacionario que experimentó un crecimiento de un 7% en 1976 a 12% en 1977. El incremento fue ocasionado por los bajos aprovisionamientos internos que elevaron los precios de los granos básicos y otros productos alimenticios. En 1979 el problema se ha agravado por las sucesivas alzas del petróleo y sus derivados, el alza en la electricidad, etcétera.

2. El crecimiento real de la economía entre 1976 y 1978 osciló entre el 4% y el 5%, tasa que es influenciada por el reducido crecimiento del sector agropecuario. La falta de dinamismo se debe, fundamentalmente, a la declinación en los precios internacionales del café y de otros productos de exportación y al bajo crecimiento de las inversiones.

3. El crecimiento industrial subió apenas en un 3% en 1978, basado principalmente en la demanda interna ya que las exportaciones no fueron muy importantes en el periodo. La situación de la industria se refleja en el estancamiento que experimentó la importación de bienes de capital e intermedios. También por el decrecimiento del sector construcción en el área industrial.

4. La composición de la ocupación en las distintas ramas de actividad económica en 1978 presenta variaciones muy poco pronunciadas con respecto a los años anteriores. Tanto en el sector agropecuario como en el manufacturero hubo marcadas disminuciones en la ocupación muy poco compensadas por el aumento que experimentaron los sectores construcción, comercio y servicios.

5. La conducta del sector externo fue desfavorable para la economía salvadoreña a partir de 1974. Las exportaciones sufrieron en 1978 una caída del 10.5% con respecto a 1979 en tanto que las importaciones superaron a las de 1977 gracias al levantamiento de las medidas restrictivas a las importaciones y la pérdida de dinamismo de las actividades industriales internas.

6. Las causas que más se aducen para explicar la crisis económica son la intensificación de los problemas políticos internos, la desaceleración de la inversión privada, la fuga de capitales nacionales y de muchos empresarios extranjeros, el alejamiento de la inversión extranjera.

7. Las políticas económicas del Estado así como la orientación del gasto público han tendido a favorecer a la empresa privada, sobre todo a los sectores financieros y de la construcción. Se advierte que muchas de las medidas adoptadas por la actual gestión presidencial tratan de rectificar las políticas reformistas del gobierno anterior, utilizando para eso instrumentos de carácter conservador y estabilizantes.⁶

⁶ Véanse artículos aparecidos en Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, San Salvador, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"; Luis de Sebastián: "¿Es conveniente reducir el impuesto a la exportación de café?" (enero/79, núm.

8. El Producto Territorial Bruto por habitante sufrió un descenso de 2.6% anual entre 1970-1974 a 1.6% anual entre 1974-1978.

9. El financiamiento del Estado ha sufrido un deterioro debido a que en los ingresos corrientes se ha reflejado la notable insuficiencia de los recursos tributarios nacionales. Se señala, por ejemplo, que la implementación de los proyectos de las zonas francas ha debilitado la capacidad financiera estatal al representar un campo de inversión estatal pero que no incrementa los ingresos fiscales.

Estos son los rasgos más importantes que matizan el presente político del país, los cuales deben ser considerados más allá del impresionismo político, penetrando más profundamente en la compleja red de relaciones económicas, sociales y políticas que se ha estructurado en el país desde hace varias décadas. Nos interesa, en esta exposición, el desarrollo más próximo de la actual correlación de fuerzas que moviliza la irresoluble contradicción de nuestra sociedad para lo cual partiremos de la rápida descripción anterior que resume, mínimamente la complejidad política actual de El Salvador. ¿Qué significa un Foro Nacional en las condiciones críticas del país? ¿Un intento de "unidad nacional" dejando al margen los grupos populares con los cuales tendría que llegarse a un compromiso para pacificar la situación? ¿Unidad entre quiénes? ¿Entre fuerzas del campo dominante? ¿Es que ha ocurrido una fisión en el interior de dicho campo? ¿Qué significan las elecciones para Alcaldes y diputados en este contexto? ¿Qué significa la irrupción en la escena política del movimiento obrero y campesino a través de organismos políticos más autónomos? ¿Qué función desempeña la represión dentro de esta crisis concreta? ¿Cuáles son las relaciones entre la política y la economía? ¿Cómo son los elementos internos sobredeterminados por la variable externa? ¿Por qué la iglesia católica se presenta como la institución más importante ante el poder gubernamental? ¿Por qué ha crecido la importancia de las organizaciones corporativas: sindicales, gremiales, empresariales, etcétera, mientras las actividades de los partidos políticos han sufrido un claro reflujó en su participación política? ¿Cuál es la escena política real de nuestra sociedad? No todas estas incógnitas podrán ser despejadas en el presente trabajo pero el intento de aproximarnos a las respuestas serán la guía en esta exposición y el elemento ordenador de las reflexiones sobre dichos problemas.

8), "La actual crisis de liquidez" (oct./78, núm. 5), "Consideraciones sobre la función del ahorro en El Salvador" (sept./78, núm. 4); De Dada, Héctor, "Balance del año económico 1978" (dic./78, núm. 7). O el artículo responsabilizado por los Editores: "El Plan Bienestar para Todos" (mayo/78, núm. 1).

II. LA "BASE HISTÓRICA DE ESTADO"

Nuestra imagen sobre el proceso reciente del desarrollo del capitalismo en El Salvador⁷ gira en torno a la idea de que el apareamiento de importantes formas y actividades del capital industrial,⁸ tanto en el campo como en las ciudades, ha llegado a generar "fisiones" de gran importancia en la clase dominante, aun cuando tales formas y actividades nunca han logrado configurar un "proyecto hegemónico", autónomo y siempre ha estado limitado por las condiciones de desarrollo del capital agrario. Nuestra idea, sin embargo, no es la del surgimiento de una simple oposición entre "terratenientes" e "industriales", como en el modelo clásico, ni la de una fusión completa de intereses, estructural o coyuntural, de toda la clase dominante, idea que podría llevarnos a aceptar el extraño término de "clase genérica". Los sectores que tradicionalmente han sido conocidos como "terratenientes" han aceptado y participan activamente en determinadas formas de industrialización y en la cúpula de los también tradicionalmente llamados "industriales" pueden encontrarse fuertes vínculos con el capital agrario, sea como "terratenientes" o como agentes en otras actividades que giran en torno a la propiedad territorial. Es posible, ciertamente, hablar de una coincidencia de intereses entre estos grupos y es éste el contenido con el cual hemos intentado redefinir la "situación de poder económico compartido".⁹ Estos grupos se han beneficiado por el tipo específico de desarrollo capitalista que de esta manera se ha generado en nuestro país aunque, a largo plazo, ciertas condiciones que el capital industrial necesita para su expansión hayan comenzado a crear contradicciones en la clase dominante. Creemos que a un nivel únicamente económico sería casi imposible definir o especificar a estos grupos, sobre todo cuando sus intereses se han esparcido en casi todas las ramas y sectores de la actividad económica, y que es en el campo de la ideología y las formulaciones políticas (sin olvidar, naturalmente, las determinaciones económicas) donde debe de profundizarse

⁷ Estas observaciones tratan de continuar los planteamientos hechos por investigadores de la realidad nacional: Rafael Menjivar, *Crisis del desarrollismo*, San José, Educa; Alonso, Esther y Daniel Slutzky, "La estructura agraria de El Salvador y el conflicto actual", en *La guerra inútil*, San José, Educa, 1971; Hugo Molina, "Bases económicas del desarrollo industrial en El Salvador (ensayo preliminar)" (manuscrito); Ernesto Richter, *Proceso de acumulación y dominación en la formación sociopolítica salvadoreña*, San José, Programa Centroamericano de Ciencias Sociales-CSUCA. Trabajos nuestros: "El papel del Estado en el proceso de industrialización de El Salvador" (próximo a editarse en UCA Editores). Para orientaciones teórico-generales véase Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1974.

⁸ Karl Marx, *El capital*, México, Fondo de Cultura Económica. t. II, pp. 49-51, 92; t. III, pp. 272-296.

⁹ Juan Carlos Portantiero, *op. cit.*, p. 65.

para tal fin. Si en el plano económico ya hay una gran difusividad, el problema se agrava en el nivel ideológico-político. No todos los "terratenientes" que participan y aceptan las actividades industriales y no todos los "industriales" vinculados al capital agrario, muestran solidaridad con ciertas reformas y orientaciones sociales y políticas, sobre todo las que se refieren a la ampliación de la participación social y política de grandes mayorías o a las mismas modificaciones estructurales en el agro, que supone el dominio del capital industrial. Tampoco podríamos afirmar que esta oposición se mantiene inalterable, constante, durante todas las fases, periodos o coyunturas del proceso. Se dan momentos de "apertura" que, creemos, dependen del momento del ciclo económico tan dependiente, en nuestro caso del "factor externo". Así, no es tan simple pensar en que los "terratenientes" son todos "retardatarios", "reaccionarios", etcétera, pues muchos grupos aceptan la industrialización aunque de éstos, no todos aceptan los supuestos y condiciones sociales y políticas que tal proceso exige. Tampoco la calidad de "industrial" es garantía para pensar en "la fuerza del progreso". (Lo anterior es pensado en el interior de la clase dominante y no en su relación con la clase dominada.) En el interior del corte económico no podemos visualizar una separación tajante entre "terratenientes" e "industriales", ya hemos visto el entrecruzamiento de intereses, pero sobre este entrecruzamiento de intereses tampoco coinciden permanentemente las definiciones ideológico-políticas. ¿Cuál es entonces la solución? Una aproximación, creemos, es no pensar en los grupos aislados sino en relación con las tendencias de desarrollo que manifiestan ambos tipos de capital y que, con relativa claridad, se expresan en las relaciones políticas, en las relaciones que se estructuran entre las diversas fuerzas políticas, a través de las cuales se expresan esos grupos económicos tan difusos, y el Estado. En los tipos de alianza que son necesarios para dinamizar las complicadas estructuras, en el contenido concreto, en cada momento histórico, de dichas alianzas y en el producto de estas alianzas. En el contexto global y unitario del desarrollo capitalista de nuestra sociedad abstraer las líneas tendenciales que ambos tipos de capital promueven a través de las fuerzas políticas que tratan de imponer sus "proyectos de acción" y de convertirse en "bloques de poder" y la forma compleja en que el Estado, redefiniéndose permanentemente, sintetiza los distintos intentos de hegemonía. Sólo en la dinámica del proceso mismo, en el enfrentamiento de los distintos "proyectos de acción" de las diversas fuerzas políticas que son las "portadoras de las estructuras" podrá reconocerse la especificidad de las clases sociales de nuestra sociedad. Es en el plano político en donde se definen. Por último, creemos que la disposición a aceptar vincularse con capital extranjero tampoco es una variable que especifique, aunque los configure, a estos grupos pues el capital extranjero ha demostrado una indiferencia sociopolítica en su ubicación a través de su asociación con el capital nacional.

Sin pretender imputarles un *status* teórico utilizamos los términos de “frente agrario” y “grupos industrializantes” con propósitos estrictamente funcionales. El primero se utiliza para identificar el conjunto de fuerzas políticas que, en un momento determinado, se identifica con la tendencia del capital agrario y no para referirnos a las actividades económicas tan diversas a que se dedican los grupos a que dichas fuerzas representan. El segundo término se utiliza para referirnos a aquellas fuerzas políticas que, aunque participan y refuerzan la tendencia del capital agrario, propugnan por que la tendencia del capital industrial llegue a predominar (dominio económico) y a hegemonizar (dominio político) y que aceptan las orientaciones sociales y políticas, con la relatividad del caso, que supone el proceso industrial. La permanente descomposición/recomposición de estos “frentes” o “grupos”, la dinámica interna en cada uno de ellos, la correlación de fuerzas en que se redefinen frente al campo dominante y popular, etcétera, especifican los “equilibrios de compromiso” que se dan entre las distintas fuerzas involucradas y que cristalizan en el Estado y en formas determinadas de dominación.

La inestabilidad que caracteriza a nuestra historia política a partir del 48 da cuenta de los constantes enfrentamientos y alianzas, a través de las fuerzas políticas que las portan, entre estas tendencias, de la debilidad de las alianzas que entre ellas se establecen y de la dureza de las estructuras formadas con la predominancia de la tendencia agraria, la cual no acepta fácilmente patrones ampliados de distribución económica ni, mucho menos, las condiciones y consecuencias de tal distribución en el nivel de las relaciones sociales y políticas.

Todos los intentos de fracturar el frente agrario se han estrellado ante el dominio que éste ha manifestado tener sobre los sectores económicos que mayores divisas proporcionan al país y sobre la compleja configuración supraestructural con que se articula. Es el caso de los inicios, en el 50, del actual proceso de industrialización cuando grupos industrializantes, con nuevas experiencias en la inversión industrial en el exterior y en la apertura de nuevos sectores agrícolas en el interior del país que permitían tal tipo de inversión, junto a capas burocráticas nacionales e internacionales y a grupos militares de rangos medios intentan remozar las estructuras y crear las condiciones para el predominio del capital industrial. En pocos años el capital agrario ha aceptado y controlado la nueva actividad industrial sin llegar a aceptar otro tipo de cambios. En la medida en que participa de los beneficios de la industrialización acepta cierto tipo de intervención estatal en favor de las nuevas actividades, acepta el “Estado promotor” que altera mínimamente las “tradicionales estructuras agrarias”. Fue el caso cuando los grupos industrializantes a comienzos de los años 60, para no enfrentarse a la necesidad de modificar las estructuras agrarias, sociales y políticas del país, hacen uno los cinco débiles mercados de los países centroamericanos. El experimento, por lo frágil y lo errático de su estructuración, apenas resistió menos de una década. El rotundo fra-

caso, en 1976, de la "transformación nacional", que tenía su talón de Aquiles en la "transformación agraria" es otro fracaso del grupo industrializante. Estos importantes, pero fallidos, intentos de hacer avanzar la tendencia "progresista" faculta a pensar en la inviabilidad de montar un modelo de acumulación alternativo desde esa "situación de poder económico compartido", en la que el "proyecto industrial" nunca llega a ser el proyecto más importante de la clase dominante. Pareciera que esta articulación económica rechaza estructuralmente una ruptura más profunda que podría favorecer más enérgicamente la modernización del sistema. La actual coyuntura, sin embargo, muestra las limitaciones del modelo "agro/industrial-exportador" que se ha configurado paralelamente a las frágiles alianzas que postergan el pleno desarrollo industrial. Los mecanismos del actual modelo dejan al descubierto hondos "resquebrajamientos" que alcanzan a iluminar no sólo la importancia del "mercado interno" para el crecimiento sino también la necesidad de modificar el sistema de dominación y el sistema político. Nunca, quizá, la clase dominante ha estado tan cerca de llegar a concebir la sociedad como una "totalidad". El resurgimiento del movimiento popular en un momento en que todavía no han cicatrizado completamente los "rasguños" de los últimos enfrentamientos en el interior de la clase dominante (y de la clase política) y en un contexto de crisis económica le obligan a esta nueva visión que, no obstante, no garantizan las soluciones en esa misma tendencia.

I. LA SOCIEDAD SALVADOREÑA DESDE EL 76

a] *De octubre de 1976 a julio de 1977: un periodo de regencia*¹⁰

En el último año de Molina, especialmente después de su marcha atrás en los intentos de realizar una "transformación agraria", el "frente agrario" recupera sus posiciones políticas que había visto disminuidas desde que, a partir de 1972, el equipo gobernante logró aglutinar diversas fuerzas que lo estimulaban, cada una de ellas por distintas razones, a efectuar cambios en el "agro" (grupos industriales que nunca llegaron a manifestarse en forma organizada, sectores de la iglesia católica, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", sectores de las fuerzas armadas y de la cúpula de la tecnocracia estatal, campesinos organizados en la Unión Comunal Salvadoreña y Orden, organismos internacionales y de la emba-

¹⁰ Apartado en base al informe del Latin America Bureau, "El Salvador bajo el general Romero", Un análisis de los primeros nueve meses del régimen del presidente Romero, Gran Bretaña, mimeo, 1978.

jada norteamericana, etcétera). De octubre del 76 a julio 1/77 (toma de posesión del actual presidente de la República) Molina proyecta una burocrática imagen de "regente" sin capacidad siquiera de proteger a los grupos que más habían apoyado la medida de "transformación agraria", como es el caso de los jesuitas y la UCA. Este periodo se caracteriza por el claro dominio que tienen de la situación la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de FARO, una especie de corporación y partido político de grandes terratenientes, que sostuvieron exitosamente la dirección de la campaña y el movimiento en contra de la realización de la "transformación agraria". Ambas agrupaciones —la primera incluye 32 corporaciones empresariales—, surgen con una posición relativa de poder reforzada de su enfrentamiento con el Estado, el cual se ve debilitado y aislado de todas las fuerzas políticas del país. Las organizaciones populares nunca apoyaron los programas propuestos por Molina; las otras fuerzas que sí lo hicieron abandonan, casi con el mismo silencio con que apoyaron el proyecto, la escena política; las que se le opusieron llegan incluso a sustituirlo. El partido político oficial (PCN), que había manifestado apoyo al proyecto de Molina y que, en cierto sentido, había representado a los sectores empresariales (a tal grado que habían desaparecido los otros partidos burgueses), es relegado por la empresa privada que decide expresarse directamente a través de sus propias organizaciones. Esta ofensiva de la empresa privada desarticula completamente los proyectos reformistas e inaugura un periodo de represión contra los grupos populares, especialmente campesinos, y contra la iglesia católica. En noviembre del 76 irrumpe el movimiento campesino, orientado por el Bloque Popular Revolucionario (BPR), demandando alzas de los salarios en las próximas cosechas y la efectiva reubicación de los campesinos afectados por la Presa Hidroeléctrica de Cerrón Grande que había comenzado su embalse. La represión gubernamental y las campañas de la empresa privada en contra de las organizaciones campesinas (FECCAS-UTC), cuyo poder comenzaban a conocer, fueron casi inmediatos. Rápidamente se relacionó el movimiento campesino con la Iglesia (con los "curas del tercer mundo") ligando estos hechos con el apoyo que los jesuitas habían dado al proyecto de "transformación agraria" y con las fuertes denuncias que éstos hicieron, luego del fracaso del proyecto, en contra de los grupos dominantes que lo obstruyeron. Las diferentes diócesis mostraron una honda división que fue aprovechada por FARO para focalizar como responsables al arzobispo, a algunos jesuitas y a "altos dignatarios eclesiásticos" tales como los pastores rurales de la Arquidiócesis. La campaña en contra de la iglesia católica se mantiene, con la misma intensidad, hasta finales del mes de julio del 77. Veinticinco sacerdotes de varias órdenes religiosas y nacionalidades sufren la persecución en diversos grados: torturados, encarcelados, expulsados del país, asesinados, impedidos de regresar al país, etcétera.

La persecución religiosa abre un nuevo espacio para la denuncia de lo que pasa en el interior de El Salvador: lo internacional, que posterior-

mente se convierte en una extensión de la escena política nacional. Periodistas de todo el mundo descubren El Salvador y sus injusticias. Organizaciones internacionales se interesan por lo que sucede en el interior del país y presionan para que cese la persecución religiosa y campesina. Personalidades de todo el mundo se preocupan por lo que sucede en El Salvador y hasta el Congreso de los Estados Unidos realiza una audiencia sobre la persecución religiosa en El Salvador (julio 21-29/77). Tanto en el interior como en el exterior del país la Iglesia también adquiere una "posición relativa de poder reforzada" por ser la institución a la que acuden en búsqueda de arbitrio tanto los campesinos que en ese mismo periodo han comenzado un proceso de tomas de tierras como los terratenientes afectados por las tomas. La Iglesia se muestra más efectiva que las instituciones estatales para resolver gran cantidad de conflictos. A ella acuden los familiares de personas encarceladas o desaparecidas; es buscada como intermediaria en los casos de secuestros realizados por grupos armados de izquierda, etcétera. Nacional e internacionalmente la Iglesia se legitima como la representante real de amplios grupos populares y el grado de confianza de que goza contrasta con el deterioro que sufre el Estado en ese periodo.

En febrero del 77 se realizan las elecciones presidenciales en las que la Unión Nacional Opositora (UNO) presenta como candidato a un militar retirado. Ante el oscuro manejo del recuento de los votos por parte del Consejo Electoral, apoyado por varias organizaciones políticas y gremiales, el candidato opositor denuncia el previsto fraude electoral. Durante 8 días se mantienen en la Plaza Libertad para protestar nacional e internacionalmente. El 28 de febrero los cuerpos de seguridad y el ejército desalojan violentamente a los ocupantes de la plaza, hecho que tiene grandes repercusiones internacionales. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por parte de los partidos populares son obligados a salir del país, de la misma forma que lo hicieron con los candidatos que la misma UNO propuso para las elecciones presidenciales en 1972. Entre el 21 y 28 de febrero hubo demostraciones de protesta y de apoyo al triunfo popular en varios lugares del país. En la capital hubo quema de autobuses, manifestaciones en varios lugares, mítines, etcétera. Ninguna demanda fue escuchada. De esta manera millares de electores, como en el 72, eran desvalorizados políticamente en tanto que los partidos pasaban a una situación de semiclandestinidad, desgastados políticamente. La división en el campo popular no permitió una respuesta adecuada a la situación.

Al comenzar su gestión el 1 de julio de 1977, el actual presidente de la República recibía un Estado completamente disminuido y deteriorado ante una empresa privada reorganizada políticamente. Ante una Iglesia fortalecida por el apoyo popular nacional y la solidaridad internacional. Ante la práctica disolución del sistema de partidos políticos y ante un movimiento popular que ascendía rápidamente en la escena política, mostrando nuevas formas de resistencia y de acción ofensiva. Ante una opinión internacional hostil al gobierno por el irrespeto a los derechos humanos, hecho

que parecía agravarse, por lo menos para ciertos intereses norteamericanos, por el fracaso reciente de las medidas reformistas impulsadas por organizaciones internacionales.

Con la llegada de Romero a la presidencia desaparecía el estado de "regencia" sostenido por Molina y cristalizaba plenamente el dominio político del "frente agrario". Un nuevo tipo de alianzas se redefinía en el interior de los grupos de la clase dominante. La dirección, en este caso, está asegurada por el frente agrario el cual tratará de reordenar las relaciones económicas de acuerdo a sus intereses. La gestión de Romero se caracteriza por el constante llamado a la "unidad" y la búsqueda, por medio de la lucha contra el "terrorismo" y la "subversión", del "orden social". El periodo presidencial muestra, hasta el momento, tres cortes históricos: a] de julio 1/77 a noviembre 24/77 en el cual, por diversas razones, se da un ensayo general de "apertura" en comparación a los meses anteriores; b] de noviembre 24/77 a febrero/79 subperiodo de gran agitación marcado por la implantación de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público; c] de febrero de 1979 hasta estos días, subperiodo en el cual la crisis parece haber alcanzado máximos grados de intensidad y en el que se propone un proceso de "fortalecimiento de la democracia" como solución a la crisis.

b] *De julio a noviembre de 1977: la "apertura" que se cierra*

Durante el primer corte que hemos visualizado, en los primeros días, Romero inicia sus permanentes llamados a la "unidad", reconociendo que existen injusticias sociales en el país y la necesidad de realizar cambios políticos, sociales y económicos "que sean justos y convenientes". Expresa la idea de que el Estado debe ser un árbitro y no un elemento de agudización de tensiones, las cuales deben desaparecer por medio de la "colaboración" y no por el "aniquilamiento de resistencias". El llamado a la unidad pareciera dirigido más a los grupos que apoyaron el proyecto de transformación agraria y a los partidos políticos que a las "organizaciones populares" para las cuales no hay mención explícita en los primeros meses. Manifiesta su decisión de luchar contra la subversión y previene a los elementos religiosos que, con sus acciones, tratan de provocar la "desarmonía" entre los salvadoreños. Expone que existen asuntos en los que no debe de haber injerencia extranjera de ningún tipo. ORDEN sufre una serie de reorganizaciones convirtiéndose en el punto de apoyo de Romero a través del cual intenta controlar las áreas urbanas y rurales. El PCN sufre una "limpia" por haber impulsado la "transformación agraria" y muchos de sus prominentes dirigentes son expulsados o simplemente olvidados. Este partido sufre un desplazamiento político que hasta el momento no ha logrado cambiar completamente. Todos estos pasos lo definen ante cada una de las fuerzas políticas que se oponen o que lo sostienen.

Lo más importante en los primeros días de gobierno son el acercamiento con la Iglesia, debido a que es ella quien domina en el nivel internacional y a la próxima audiencia del Congreso norteamericano sobre la persecución religiosa en El Salvador; el restablecimiento de relaciones cordiales con Estados Unidos que no había nombrado embajador oficial debido a las tensiones que se suscitaron en los meses anteriores con el gobierno salvadoreño; el restablecimiento del "orden social" para mejorar el prestigio internacional y agilizar la obtención de créditos internacionales que estaban suspendidos temporalmente desde hacía varios meses; estrechar las relaciones con distintos grupos económicos y políticos para fortalecerse internamente y buscar la legitimación cuestionada por importantes sectores.

La Iglesia inicia el diálogo pero exige condiciones como el regreso de los sacerdotes exiliados y la libertad de los presos políticos. Meses más tarde los partidos políticos asistirían a reuniones en las que exigirían lo mismo. Los Estados Unidos envían al asistente del vicesecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos ante el cual Romero expone sus planes de "democratización" los cuales son aceptados como un buen inicio para mejorar las relaciones. En agosto recibía El Salvador un préstamo para realizar proyectos urbanos. Entre julio y noviembre hay una permisividad relativa para las manifestaciones públicas urbanas, realizándose entre el BPR, FAPU y partidos políticos cerca de 14 mítines. Los planteamientos políticos hechos por estas organizaciones giran en torno al cese de la represión, a la libertad de presos políticos, apoyo con los sectores más golpeados por la represión, solidaridad con reivindicaciones de los maestros, campesinos y obreros urbanos, tales como mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y alimentación, etcétera. Romero y las fuerzas armadas expresaban su oposición ante la violencia "yenga de donde venga".

A partir de agosto las tomas de tierras y las huelgas obreras comienzan a sacudir el país. Entre agosto y noviembre se dieron cerca de once huelgas industriales que fueron apoyadas por FAPU y BPR. Y varias tomas de tierras. Entre octubre y noviembre la actividad de los trabajadores del campo se intensifica realizando no sólo manifestaciones en varias ciudades del interior del país sino también presentando anteproyectos de salarios mínimos y otras prestaciones. Nuevas organizaciones sindicales y políticas nacen en este periodo como, por ejemplo, el Comité Intersindical, el Comité de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, etcétera. Se da la primera huelga de solidaridad para obtener la libertad de sindicalistas detenidos arbitrariamente (Sindicato de la Industria Pesquera en Puerto El Triunfo). El movimiento reivindicativo adquiere grandes proporciones. En noviembre 10, miembros del BPR toman el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en apoyo a las negociaciones de dos fábricas textiles y de los anteproyectos de salarios mínimos para los trabajadores del campo. Con la mediación del arzobispado los ocupantes del Ministerio logran sus objetivos.

Pero la relativa tolerancia que el gobierno mostró en la capital tuvo márgenes más estrechos en las zonas rurales, donde se realizaban operaciones militares en lugares seleccionados, en los lugares más importantes para las organizaciones campesinas. Fuerzas militares realizan cateos a municipios y cantones y, en ciertos casos, se da ocupación militar por dos o tres días de pueblos enteros. Líderes campesinos, catequistas católicos, miembros de base de las organizaciones campesinas o de las comunidades religiosas, sacerdotes, son perseguidos, detenidos, torturados, etcétera. Se impide, en varias comunidades, las libres actividades religiosas. La iglesia católica intensifica sus protestas y denuncias a nivel nacional e internacional.

Las organizaciones armadas de izquierda, en este periodo, se muestran bastante activas, también. Realizan "ajusticiamientos" entre los que se encuentran el de un ex presidente y el del rector de la Universidad; secuestros, ocupación de radiodifusoras, detonación de bombas, etcétera. Por otra parte, las relaciones del gobierno con los Estados Unidos, en la medida que la situación centroamericana parecía acercarse a la inestabilidad (elecciones en Guatemala, enfermedad de Somoza, los próximos tratados de Panamá, etcétera), parecían mejorar rápidamente. Romero es invitado a la firma de los nuevos Tratados de Panamá en Washington, se nombra al embajador y se otorga un préstamo del BID de noventa millones de dólares. Romero invita a visitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para constatar la observancia que en El Salvador se hace de los Derechos Humanos.

Desde septiembre de 1977, al ocurrir el asesinato del rector de la Universidad, la empresa privada dirigida por ANEP y FARO habían comenzado a presionar al gobierno para que tomara medidas más drásticas contra la movilización popular que mostraba su poderío en distintos niveles de la lucha política. En ese mismo mes Romero se reúne con el Consejo Directivo de la recién formada Universidad "José Matías Delgado", formado por importantes hombres de negocios, empresarios, banqueros, etcétera, en la que se concluye que hay necesidad de "preparar inmediatamente reformas a la legislación penal para reacomodarla a las circunstancias actuales".

Preocupados por la situación internacional, la clase política busca detener las irrupciones reivindicativas del sector popular dentro del marco legal. Las campañas periodísticas hacen su aparición pidiendo una legislación más "dura" y exigiendo la unidad en contra del "terrorismo". A finales del mes de octubre las manifestaciones del BPR terminan en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y con muertos en ambos bandos. En noviembre 12, la muerte de un industrial en un secuestro fallido sirve para desatar más intensamente la campaña de la empresa privada en contra del movimiento popular. La ANEP dirige, con la misma fuerza mostrada cuando la transformación agraria, la nueva ofensiva. Se decreta la suspensión de labores en los centros industriales y comerciales con el objeto de que los trabajadores asistan al entierro del industrial. El sepelio se convierte en un verdadero desfile de protesta en contra de la pasividad

del gobierno y la consigna, que resume sus exigencias, es coreada en las calles de la capital: "Queremos paz... gobierno ¿dónde estás?" Las apelaciones ya no se dirigen al gobierno sino, directamente, a las fuerzas armadas. La Cámara de Comercio afirma, públicamente, que los movimientos obreros, los paros y huelgas ilegales, paralizaban la inversión del capital nacional y ahuyentaban la inversión extranjera.

Articulistas identificados con FARO presentaban alarmados que, ante la situación de violencia en el país, el deseo de los inversionistas era sacar del país su dinero. Los problemas económicos que golpeaban a los sectores populares y por cuya solución mantenían su movilización y exigencias son trasladados, en su totalidad, al plano político por parte de ANEP y FARO. Pidiendo una legislación más dura, ya que la abierta y simple represión ocasionaba (en ese momento) problemas internacionales, llegaban a exigir un "Estado de derecho". Para este momento las relaciones con los Estados Unidos han mejorado grandemente y el mismo secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado Norteamericano, en respuesta a la sección femenina de FARO, deja ver la simpatía norteamericana para que se combata duramente a la represión "dentro de la ley". Así, en noviembre 24, en un solo día, se aprueba la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público.

La Iglesia mantiene su prestigio y confianza, interna y externa, los partidos políticos aún no llegan a reponerse políticamente y ante la movilización popular dirigida por BPR y FAPU son relegados de la escena política sin llegar a perder su "influencia" modesta de denuncia en el plano nacional e internacional. La empresa privada ha renovado sus mecanismos de cohesión y ha probado su capacidad de presión y de injerencia en la conducción política del país. Sin meditar mucho sobre los problemas internos del Estado para realizar rápidamente los movimientos para satisfacer sus exigencias y ante el hecho de que, con tardanza, el Estado ha llegado a sus mismas posiciones, la ANEP y FARO ven al Estado como una institución debilitada y hasta ineficiente. Queda en evidencia, también, la fuerte influencia que las posiciones norteamericanas tienen en la solución de los problemas internos del país.

Pero, quizá lo más importante de este periodo es que el Estado, siguiendo la línea de la transferencia de los problemas laborales como "bloque" (sin mediación ninguna) al plano político, unifica en la imagen de "enemigo" tanto a trabajadores en huelga como a los miembros de organizaciones armadas de izquierda, tanto a sacerdotes como a políticos, tanto a miembros de organizaciones políticas no clandestinas como a "guerrilleros". Todas las actividades de los contestatarios del régimen son consideradas "criminales". Esto abre un nuevo momento en el que el Estado se olvida de las "causas" que generan los problemas y las "injusticias sociales" del país, como decía al inicio de la gestión, y se enfrenta a detener el "deterioro moral" de nuestra sociedad identificada en la figura del "terrorista".

c] *De noviembre de 1977 a febrero de 1978: una ley de "excepción" ante la crisis*

El "frente agrario" en el poder había logrado, con ciertas reservas y relatividad, que la representación norteamericana se integrara al nuevo equilibrio de compromiso, en el cual el grupo industrializante se encuentra subordinado e inmovilizado luego del estruendoso fracaso de la transformación agraria. Esta vez, las fuerzas en el poder se enfrentaban a un campo popular desarticulado en términos de unidad pero con organizaciones fuertemente cohesionadas individualmente, que abrían frentes eficaces en todos los niveles de la realidad sociopolítica del país. La Iglesia, las organizaciones populares, los distintos "comités" de denuncia, las organizaciones corporativas sindicales y rurales mostraban actividades de gran impacto y que descubrían la imposibilidad estatal de imponer un orden político.

El momento que transcurre entre el 24 de noviembre de 1977 y febrero de 1979 está fuertemente marcado por el imperio de una Ley de Defensa y Garantía del Orden Público que es calificada por los grupos opositores como una "legalización de la represión contra el pueblo" y como la implantación de un permanente "Estado de excepción". Significaba la negación a un diálogo por la "unidad" que tantas veces se había escuchado proveniente del gobierno. Este subperíodo se caracteriza por el trazo impresionante que deja el movimiento huelguístico de los obreros urbanos a lo largo, y en forma continua y permanente, de los casi dieciséis meses que se mantiene la ley. Por el trazo espeluznante que forma la represión, pogromos constantes y permanentes, en contra de los campesinos en distintos lugares del campo salvadoreño. Por la gran cantidad de ciudadanos que son enjuiciados y afectados por la nueva ley. Por la evidencia de la división interna de la Iglesia católica y por las muestras concretas de solidaridad que ésta recibe por su decidida defensa a los derechos humanos. Por la gran cantidad de investigaciones y visitas internacionales sobre la situación de los derechos humanos y por las innumerables condenas a la situación de represión que vive el país por parte de organizaciones magisteriales, campesinas, obreras, políticas, etcétera, de diversos países americanos y europeos. Por los secuestros que los grupos armados realizan en este periodo, sobre todo a empresarios extranjeros. Es, quizás, el año en que se manifiesta más agudamente el conflicto Iglesia-Estado.

Efectivamente, en los dieciséis meses que rige la ley se dan más de cuarenta huelgas obreras en todo el país. Orientadas, en su gran mayoría, por el FAPU y el BPR que progresivamente han logrado penetrar el mundo sindical, reorientando las luchas sindicales y desplazando las tendencias sindicales controladas por el Partido Comunista Salvadoreño. Esta nueva orientación transforma interiormente el mapa sindical aun cuando su estructura formal o legal se mantenga. Entre las reivindicaciones de las huelgas

se encuentran el pago completo por las horas extras trabajadas, prestaciones sociales, mejor trato en las fábricas, defensas contra las medidas antisindicales, contrato colectivo, detener las suspensiones y despidos masivos de los trabajadores, indemnizaciones por despidos, etcétera. Nuevos métodos de lucha son empleados, como por ejemplo las ocupaciones de las fábricas, que no llegan a poner en funcionamiento pero que los alejan de los simples "piquetes" a las entradas de la unidad productiva. Toman como rehenes a patrones, gerentes y empleados de las fábricas para agilizar las negociaciones y protegerse de la represión. Muchas de las huelgas son disueltas por los cuerpos de seguridad y el ejército, otras son ganadas total o parcialmente o derrotadas jurídicamente. El mundo obrero hace sentir su peso específico en el orden económico y político del país. Solidariamente a estas huelgas algunos grupos armados de izquierda realizan actividades que van desde los secuestros hasta el ametrallamiento de jefes de personal de las fábricas en las que mayores problemas se han suscitado.

El movimiento campesino recibe duros golpes a lo largo de estos meses. En cada semana puede encontrarse detenciones, cateos, torturas, asesinatos, saqueos, etcétera, de varias zonas campesinas en todo el país por parte de los cuerpos de seguridad y miembros de ORDEN. Momentos decisivos de esta situación son el ametrallamiento de los campesinos en marzo 17, que se dirigían al Banco de Fomento Agropecuario para discutir, con cita previa, el pliego de peticiones presentadas anteriormente. Entre las peticiones se encontraban rebaja en los precios de semillas, facilidades para arrendar tierras, ayuda técnica y crediticia, etcétera; el cerco e invasión militares que sufre la población de San Pedro Perulapán y lugares aledaños, también en el mes de marzo. Cada vez más los miembros de ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), campesinos de las mismas zonas afectadas, son utilizados para enfrentarse a los campesinos organizados en FCCAS y UTC produciéndose enfrentamientos entre la población civil de los alrededores.

La persecución sistemática a los campesinos organizados se mantuvo de manera intensa durante todo el tiempo en que la Ley de Orden Público se mantuvo en vigencia haciendo que muchas familias tuvieran que cambiar de residencia o buscaran formas clandestinas de mantenerse en los lugares afectados, desarrollando acciones de resistencia y de ataque antes inexistentes. Muchos campesinos desaparecieron después de los cercos militares, otros fueron apresados, torturados. En agosto del 78, Amnesty International denunciaba que desde el 76 habían desaparecido más de 200 personas. En los primeros seis meses de la Ley de Orden Público seis huelgas fueron disueltas violentamente, más de ocho manifestaciones fueron reprimidas, 355 obreros detenidos, masacrada una misa en conmemoración de la matanza ocurrida cuando los partidos políticos protestaban por el fraude electoral, dos desalojos de ocupaciones pacíficas de tierras con 19 campesinos apresados, cuatro sacerdotes capturados y torturados, capturas masivas destinadas a debilitar a las asociaciones de campesinos, obreros,

estudiantes y profesores. El Arzobispado de San Salvador publicaba que hasta junio de 1978 había 790 víctimas de la Ley de Orden Público, 29 asesinados, 45 heridos y 716 capturados. En distintas ocasiones, los altos dirigentes del ejército y la misma presidencia denunciaban "complots" comunistas que querían desestabilizar el sistema económico y político del país.

El periodo que analizamos comienza con una Iglesia dividida debido al decidido apoyo que un sector de ella presta a los campesinos, sacerdotes y comunidades de base perseguidos por miembros de Orden, cuerpos de seguridad y el ejército. Este sector de la Iglesia muy prontamente denuncia la nueva Ley de Orden Público demostrando cómo ésta viola flagrantemente 12 artículos fundamentales de la Constitución Política y por lo menos 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. También inicia una campaña por la libertad de los presos políticos a través de una amnistía general y dedica muchos de sus recursos a denunciar los atropellos de que son objeto los sectores populares, especialmente los campesinos. Desde los inicios de 1978 la Iglesia recibe la solidaridad de representantes religiosos de muchos países, incluido Estados Unidos. En enero recibe la visita de monseñor Marcos McGrath, arzobispo de Panamá y segundo vicepresidente del CELAM. En el mismo mes recibe el país la visita de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos de la OEA, en tanto el Presbiterio de la arquidiócesis de San Salvador ofrece unánimemente su solidaridad con la posición de monseñor Oscar Arnulfo Romero. En febrero del mismo año, la Universidad de Georgetown reconoce el liderazgo moral del arzobispo Romero otorgándole el doctorado honoris causa. Terence Todman, quien visita el país en febrero como apoyo al gobierno salvadoreño, también visita al Arzobispado, reconociendo su influencia real entre el pueblo salvadoreño. En febrero del 78 los huelguistas del ingenio Izalco toman la catedral y la iglesia del Calvario recibiendo la solidaridad de monseñor Romero en la lucha por sus demandas a través de formas pacíficas. En este mismo mes, la Iglesia recibe la visita del congresista y sacerdote de los Estados Unidos, P. Drinan, quien posteriormente denunciaría fuertemente en el Congreso de los Estados Unidos la persecución de los campesinos y la Iglesia en El Salvador. Muestras de apoyo de sectores eclesiales de Guatemala y Honduras le son enviadas con gran periodicidad. En abril, miembros del BPR toman la catedral simultáneamente con la ocupación de varias embajadas con el objeto de llamar la atención internacional sobre las persecuciones y crímenes cometidos contra campesinos del Departamento de Cuscatlán. La policía nacional vigila constantemente el Seminario Metropolitano de San Salvador. En mayo monseñor Romero es emplazado por la Corte Suprema de Justicia para que demuestre sus denuncias en contra de los "jueces venales". En ese mismo mes el Arzobispado de San Salvador recibe el apoyo de "Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Laicos norteamericanos que han trabajado en la Iglesia de El Salvador" y del "Comité de Solidaridad con El Salvador" en Los Ángeles,

California. En el mes de mayo, también, se recibe copia de la carta que 2193 franceses enviaron al presidente de la República pidiendo respetar los derechos humanos y el castigo para los responsables de las persecuciones campesinas. Profesores de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", en ese mismo tiempo, piden a la Asamblea Legislativa que se derogue la Ley de Orden Público. En junio, la Acción Sindical Uruguaya envía muestras de su solidaridad para con los campesinos salvadoreños y para con monseñor Romero. Ese mismo mes recibe la adhesión de la orden religiosa de los franciscanos. En septiembre, monseñor Romero publica una carta pastoral sobre las "Relaciones entre la Iglesia y las organizaciones políticas populares" que termina con una invitación al diálogo y a buscar la solución de la crisis nacional. En noviembre se da a conocer el recibo de más de 150 cartas de distintos países europeos en las que se pedía el cese de la represión contra los campesinos, amnistía para los presos políticos, la derogación de la Ley del Orden Público, la disolución de los cuerpos paramilitares, etcétera. En diciembre se da a conocer que ciento diecisiete parlamentarios de todos los partidos políticos británicos habían propuesto, desde octubre, a monseñor Romero como candidato para el Premio de la Paz 1979. Para esa época el Arzobispado denunciaba que en El Salvador había 104 desaparecidos, 91 reos consignados por la Ley de Orden Público, 15 reos comunes conexos con políticos y 4 asilados en las embajadas. En noviembre de 1978 muere el sacerdote Ernesto Barrera en un supuesto operativo militar y es acusado de haber sido dirigente de grupos subversivos. En enero de 1979 es asesinado el padre Octavio Ruiz, junto con cuatro jóvenes más que participaban en cursos de iniciación cristiana, por agentes del ejército salvadoreño en el retiro "El Despertar", de San Salvador. En ese mismo mes, el arzobispo envía a la Asamblea Legislativa una demanda de amnistía para los presos políticos y para la derogación de la Ley de Orden Público que está apoyada por 30 asociaciones cívicas, políticas y religiosas.

Las organizaciones populares, los comités pro libertad de los reos políticos, tuvieron una intensa actividad durante este periodo. Se toman, en diversos momentos, iglesias, embajadas, la Cruz Roja, las oficinas de la sede de las Naciones Unidas, etcétera. Realizan visitas a diferentes países para denunciar las persecuciones internas, etcétera. Los partidos políticos tuvieron pocas actividades pero mantuvieron su presencia a través de pronunciamientos en los periódicos y peticiones a la Asamblea Legislativa para la derogación de la Ley de Orden Público. Los grupos armados de izquierda continuaron sus actividades clandestinas y secuestraron cerca de cuatro importantes gerentes de compañías transnacionales, miembros de familias adineradas, etcétera. La ANEP y FARO realizaron campañas en contra de la Iglesia y de las actividades de las organizaciones populares respaldando las medidas gubernamentales.

La situación internacional era completamente desfavorable para el gobierno salvadoreño, los préstamos y créditos internacionales hacia El Salva-

dor estaban estancados; internamente, ante los secuestros y la agitación laboral permanente, muchos empresarios decidían salir del país o trasladar a otros países centroamericanos sus empresas. Grupos de empresarios, desde mediados de año, comenzaron un diálogo con fuerzas políticas de oposición creándose un ambiente de posibilidad de crear una línea "aperturista" con franco disgusto por las acciones gubernamentales de represión y de ineficacia en la conducción política general. En el interior mismo del gobierno comienzan a presionar ciertos sectores para que puedan darse medidas democratizantes, lo cual culmina con la decisión de no intervenir, por lo menos abiertamente, en la conducción de la Universidad, la cual estaba controlada por fuerzas de derecha desde 1972. Fuerzas progresistas en el interior de la Universidad, que se habían mantenido en una lucha constante, el grado de corrupción a que habían llegado las autoridades universitarias, la tendencia democratizante en el interior del gobierno, permitieron la reorientación de la Universidad.

El Estado quedaba, así, presionado por los organismos civiles controlados por el "frente agrario" para seguir una política "dura" en contra de las protestas y denuncias populares, ante demandas de sectores estatales que tendían hacia una apertura, ante una Iglesia poderosamente respaldada por diferentes organismos internacionales, ante un grupo dominante que buscaba una alternativa con grupos políticos de oposición, ante un movimiento popular que no obstante la dureza de la represión recibida, mantenía posiciones invariables en la defensa de sus reivindicaciones. Su imagen internacional estaba desprestigiada completamente y la sola política represiva no podía mantenerlo indefinidamente en una posición tan vulnerable, tomando en cuenta que, ante la situación y el fracaso de ciertas políticas económicas, los grupos mismos del "frente agrario" manifestaban críticas al gobierno. Para atemperar la situación, el gobierno se vio en la necesidad de derogar en febrero de 1979, la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público.

d] *Desde febrero de 1979 hasta... ¿Un "fortalecimiento democrático" para derrotar la crisis...?*

De enero a mayo del 79 el movimiento huelguístico resurgió con mayor fuerza que antes. En ese periodo hubo cerca de 30 huelgas de distinto tipo. Huelgas de solidaridad de sindicatos fuertes ante los conflictos de otros sindicatos en distintas ramas de la producción. Huelgas por distintos conflictos laborales que mantienen las tendencias apuntadas anteriormente. Huelgas de protesta y de defensa ante la persecución y ola de asesinatos en contra de grandes sectores populares. Tiene rasgos prominentes la huelga de STCEL en marzo de 1979, que cortó la electricidad en todo el país durante 23 horas y que obligó a que el sector patronal, junto al

Ministerio de Trabajo, resolvieran rápidamente más de cinco huelgas que veían estancadas las posibilidades de solución. La acción de STCEL inmovilizó —prácticamente— a todo el país con lo cual adquiere esta huelga semejanzas a una huelga general. Esto asustó a las corporaciones empresariales que rápidamente comenzaron una campaña de contrataque para minar el poder que estaban demostrando los trabajadores. Se dice que “el país estaba en manos de grupos sindicalistas”.

El gobierno continúa sosteniendo que existen planes que tratan de subvertir el orden público y la estabilidad política del país y mantiene los niveles de represión anteriores. A finales de abril captura a altos dirigentes del BPR, organización que comienza una movilización para obtener la liberación de los mismos. Toma la catedral y varias embajadas, hace manifestaciones, muchos sindicatos realizan paros en distintas fábricas, etcétera. El gobierno realiza una serie de medidas drásticas en contra de las actividades del BPR, ametrallando manifestaciones pacíficas, desalojando fábricas tomadas, disolviendo violentamente huelgas por otros motivos, etcétera. El mes de mayo presenta las mayores cuotas de sangre de todo el periodo 76/79, también los movimientos de resistencia más fuertes por parte de los grupos populares, y señala el momento en que el gobierno presenta soluciones políticas sin abandonar el esquema represivo. A finales de mayo, el gobierno llama al Foro Nacional y anuncia las próximas elecciones como intentos de solucionar la crisis: junio y julio han visto la muerte de numerosos miembros de la Asociación de maestros “Andes 21 de Junio”, la persecución y asesinato de varios sacerdotes, continúan las represalias en contra de los campesinos y de los obreros, estos últimos han reiniciado, desde julio, su incontenible movimiento de huelgas que son indicadores indiscutibles del agravamiento de la crisis económica. Las fuerzas políticas continúan enfrentándose, sin que hasta el momento se perfila una solución duradera...

III. REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS DE AUTORIDAD

1. *El campo dominante*

El proceso sociopolítico que hemos tratado de resumir presenta un reacomodo de las relaciones políticas que se dan entre los grupos que conforman la clase dominante en el cual, sintetizado a partir del Estado, es la tendencia orientada por el “frente agrario” lo que predomina, hegemoniza y dirige. Esta vez, sin embargo, no ha podido presentar proyectos convincentes al grupo industrializante que permita que éstos acepten mantener subordinado su propio proyecto. Es evidente la puesta en tela de juicio de

esta hegemonía en el nuevo intento que parece haber iniciado el grupo industrializante al buscar nuevas alianzas que potencialmente parecerían favorecer a sus proyectos modernizantes. Por la falta de dinamismo de la economía nacional y regional, presionados por las irrupciones políticas cada vez más agudas en el país y Centroamérica, representantes del grupo industrializante se han aproximado a fuerzas políticas, consideradas enemigas anteriormente, e intentan impulsar una "apertura" en los canales institucionales de participación económica y política del país.

El quiebre entre los grupos que conforman la clase dominante puede apreciarse en la búsqueda que aquellos realizan por nuevos espacios, nuevas instituciones y organizaciones políticas para expresarse. Componentes del "frente agrario" abandonan ya desde el 76 su vehículo político tradicional, el PCN, y crean FARO, un organismo con características de corporación y partido político; refuncionalizan las corporaciones empresariales (es el caso de ANEP y la Cámara de Comercio, etcétera), revitalizan en el 78 el Partido Popular Salvadoreño (PPS), etcétera. Es, en ciertos momentos, a través de sus asociaciones corporativas que se expresan políticamente; tales fueron los casos cuando la "transformación agraria", cuando la implantación de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, sus campañas en contra de la Iglesia y los campesinos, etcétera. Los elementos integrantes del grupo industrializante tampoco han buscado la representación política en el PCN y han realizado movimientos de acercamiento a los partidos políticos de oposición. Es notorio, así, el debilitamiento del partido oficial y que ORDEN haya adquirido mayor importancia que aquél para ciertos sectores gubernamentales y empresariales. La proximidad de las nuevas elecciones podrían redefinir el papel del PCN y el de ORDEN.

Por otra parte, la característica más sobresaliente que adquiere el Estado ante este nuevo "equilibrio inestable" es su apertura (¿o quizás abandono?) a la voluntad de la empresa privada. Esta es una modalidad de "liberalización" (ultraliberación, podría ser) en la que presencia estatal parece disolverse en las organizaciones propias de la sociedad civil. El hecho de no contar con un verdadero "Plan Nacional de Desarrollo" "deja a las fuerzas del mercado y la iniciativa privada la regulación y orientación de los procesos económicos".¹¹ Los centros de decisión económica descubren su real y permanente ubicación: no los despachos ministeriales sino las apoltronadas oficinas gerenciales y de planificación privadas en los lujosos condominios. En las mesas de los tecnócratas desaparecen los planes y proyectos de la coordinación económica y quedan los de programación del gasto público. Otro tanto podría decirse de las actividades políticas, jurídicas, ideológicas, etcétera. El repliegue estatal del campo económico en el cual participaba, por lo menos en el nivel de la planificación indicativa global, hace que ciertas corporaciones surjan como rec-

¹¹ Dada, *op. cit.*

toras plenas de la actividad económica. La participación del Estado se ha visto reducida a las funciones clásicas del "liberalismo": la creación de las condiciones mínimas, infraestructurales básicamente, para el proceso de la producción; la reglamentación de los conflictos que ocurren entre el capital y el trabajo, favoreciendo al primero, y la administración, bajo la "doctrina de la seguridad nacional" (despojada de todo matiz reformista desde la fallida "transformación nacional"), de los medios de coerción y represión. En otros campos distintos al económico son diversas instituciones privadas de la sociedad civil, como por ejemplo la Iglesia católica y las universidades, las que adquieren mayor presencia y liderazgo social. De un Estado aislado de la sociedad, como ocurrió en los últimos meses de la gestión de Molina, se evoluciona hacia un Estado que se "disuelve en la sociedad".

La permanente rearticulación política de los distintos grupos dominantes debe pensarse en la situación del modelo vigente que se enmarca dentro de una de las crisis más profundas y prolongadas del sistema capitalista global y que coincide con, e impacta en, las irrupciones propias del movimiento de las contradicciones internas del país, que tienen su propia temporalidad y espacialidad. La crisis ha afectado, de manera diversa, a los distintos grupos dominantes del país sin que el Estado o las "fuerzas ciegas del mercado" aporten soluciones permanentes. Suficiente discusión se ha dado en torno a los reveses recibidos por los cafetaleros en relación a los precios internacionales y a las políticas especulativas del organismo estatal que dirige la política de comercialización cafetera. Lo mismo ocurre con la situación de los algodóneros y cañeros respecto al mercado internacional y a la situación monetaria mundial. Los industriales, por su parte, no han logrado estabilizar el Mercado Común Centroamericano, cada vez más convulso e ingobernable, mientras los "terceros mercados" arrojan signos muy débiles de factibilidad. Los radicales decrementos en las tasas de inversión nacional y extranjera y la fuga de capitales complementan el panorama. Las exhaustas fuentes de ingreso del Estado, la carga impositiva a la exportación y los créditos internacionales (detenidos por la inobservancia de los derechos humanos), no le permiten satisfacer las exigencias de los distintos grupos económicos condicionados a que el Estado cubra sus desajustes con las acostumbradas transferencias de ingresos de un sector a otro. Todo el cuerpo social es sacudido ante este *impasse* que sitúa al Estado, inerme y debilitado, en un fuego cruzado de presiones desde las distintas perspectivas de los grupos burgueses y de los grupos populares.

2. *El campo popular*

En el campo popular la crisis económica, política y social, como hemos constatado anteriormente, fue absorbida creativa y dinámicamente, aun-

que a veces matizada por el maximalismo propio de lo novedoso. Al mostrarse, por ejemplo, los signos del deterioro progresivo que sufría el sistema representativo de los partidos políticos, al desvalorizarse políticamente los procesos electorales, amplios sectores revisan sus formas de expresión política creando nuevas organizaciones de masas que se despreocupan de la bloqueada actividad electoral, centrando su acción en la organización y movilización de contingentes populares que luchan por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas. Al constreñirse la tradicional escena política, a consecuencia del irrespeto que tuvieron los triunfos populares en ese campo, los grupos no sólo crean y movilizan sus propias organizaciones sino que, también, tratan de involucrar a nuevos actores y de agrandar la arena política nacional. La iglesia católica, las universidades, las instituciones civiles como la Comisión de Derechos Humanos y los Comités Pro-libertad de los presos Políticos, etcétera, se convierten en nuevos actores políticos ante el relegamiento de los partidos que a pesar de su situación de exclusión no llegan a perder definitivamente su presencia y potencialidad representativa. Estos nuevos actores políticos prolongan la escena política en sus campos específicos de acción, en donde la política misma sufre una redefinición, ligándose estrechamente con las agrupaciones corporativas de las clases dominadas, tales como sindicatos, cooperativas, gremios, etcétera. Es digno de hacer notar el espacio de representatividad política de los grupos campesinos en que se convierte la Iglesia católica. Esta institución, como el ejército, es de las más antiguas organizadoras de los campesinos y, podríamos decir, de las únicas permitidas para penetrar en el campo en tanto su función ideológica se ligaba a los sistemas de dominación orgánicamente. En la medida en que la "doctrina social de la Iglesia" adquiere nuevos matices, en la medida en que el *aggiornamento* la adecúa a las necesidades de las amplias mayorías, se establece una dialéctica Iglesia-campesinos en la que uno impulsa al otro en una constante renovación. La representatividad ideológico-política que de los campesinos hace la Iglesia, creemos, es innegable aun cuando las mediaciones para realizarse tal representatividad no sean muy diáfanos ni directas.

Así, las relaciones internas de las agrupaciones populares, su expresión y fuerza se ha modificado completamente, abandonando, no sabemos si temporalmente, la representación política en los partidos que se reducía a la actividad meramente electoral. Es posible que al ensayar las modalidades novedosas de expresión y participación política actuales, los mismos grupos traten de sintetizar sus prácticas políticas anteriores para encontrar en una síntesis histórica, su práctica política orgánica. No obstante todo lo anterior, las formas de organización, los niveles de interpretación de la realidad, las concepciones sobre la estrategia y la táctica, etcétera, que desembocan en contradicciones y fuertes rivalidades entre las organizaciones populares, todavía son un obstáculo para fortalecer sus propias posi-

ciones que muestran, progresivamente, el grado de autonomía política que han adquirido sus movimientos.

Por otra parte, ante la negativa cada vez más intensa de la sociedad a facilitarle medios de producción a los campesinos, lo cual se traduce en un proceso acelerado de descampesinización y pauperización, éstos articulan sus asociaciones corporativas con frentes políticos y sus luchas llegan a cobrar gran efectividad e influencia agudizando la secular crisis en el agro salvadoreño. Las tomas de tierras, las peticiones de ayudas crediticias y técnicas al Estado, las sólidas organizaciones que han constituido, etcétera, son medidas defensivas ante el proceso de descampesinización que no llega a desembocar en una proletarización real a causa de la debilidad industrial. La respuesta ante sus peticiones distributivas es una cruda represión. El problema campesino se urbaniza, recibiendo el apoyo de amplios grupos urbanos que llegan a solidarizarse orgánicamente con sus luchas y planteamientos. Ya hemos dicho cómo la Iglesia católica se convierte en defensora de sus derechos.

Desde 1977 las huelgas obreras irrumpen fuertemente, después de algunos años de pasividad, en la escena política del país. Los campesinos no aparecían de esta manera desde la "matanza" de 1932. El resurgimiento del movimiento obrero tiene como base el hecho de que ante la falta de dinamismo de las inversiones nacionales e internacionales ante los mercados industriales disminuidos, el modelo vigente opta por sustituir la carencia de capital por trabajo, intensificando a través de la violencia y el "terror" en la fábrica, la extracción de trabajo excedente. La mayoría de las reivindicaciones de los sindicalistas giran en torno a mejoras en el trato que reciben en las fábricas, a que despidan capataces, a que se les paguen los salarios completos, a que se respeten los horarios de trabajo establecidos legalmente y que son alargados por los empresarios, a que se paguen las horas extras trabajadas, etcétera.

Indudablemente son indicadores de la defensa del trabajador ante la mayor explotación a que están siendo sometidos en el interior de las unidades de producción, en un momento en que, debido a la velocidad inflacionaria, no pueden obtener un alza en los salarios nominales mientras que, por otro lado, su salario real se ve cada vez más deteriorado, dificultando asegurar los niveles mínimos de reproducción a la fuerza de trabajo. Las tomas de locales y centros productivos, la toma de ese "santuario de la plusvalía" que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la toma de rehenes, las manifestaciones pacíficas, la toma de oficinas de organismos internacionales, embajadas e iglesias, etcétera, representan la extensión de la escena política en la que se busca "terceras" implicaciones para zanjar los problemas ya que no se encuentra el arbitrio adecuado ni los canales pertinentes para obtener sus demandas al interior del país.

La represión y la violencia con que son resueltos los problemas laborales depende en gran medida de la importancia del sector o rama donde apa-

rece el conflicto, del grado de desarrollo y poder de movilización de la organización sindical y de las contradicciones interburguesas del momento.

Ante la presión de la situación económica, política y social del país, campesinos y obreros se sienten a la vez más cerca en sus planteamientos y formás de acción, aun cuando los términos de una unidad orgánica todavía no han sido definidos con precisión. Tras los movimientos huelguísticos, tras la modificación completa del mapa sindical, sin posibilidad de calmar al movimiento campesino, ante el peligro de una eventual unidad obrero-campesina, ante la arremetida de la sociedad civil contra el Estado y ante la incapacidad de los grupos dominantes de plantear proyectos coherentes de desarrollo que zanjen sus propias diferencias y dificultades económicas, las fuerzas armadas, ahora sin un proyecto de desarrollo económico y social (como el de transformación nacional) que pudiese considerarlo como propio, actualizan periódica y artificialmente el expediente de la "conspiración comunista internacional" y optan por el desmantelamiento de las organizaciones en lucha.

3. *Crisis de autoridad y actualidad política*

La dislocación de la tradicional escena política salvadoreña es notablemente evidente: el sistema representativo de los partidos políticos, que realmente duró poco más de una década (1964-1976), se ha desgastado en los últimos siete años; la Asamblea Legislativa, en la que desesperan únicamente dos partidos del mismo "frente agrario", es apenas un débil eco del poderoso Ejecutivo y está muy lejos de ser ese "mercado" al que concurren diferentes "capitales políticos", las fuerzas políticas realizan su práctica política a través de diversos canales, menos a través de los partidos políticos y del "sistema institucional de toma de decisiones" garantizado constitucionalmente. Las universidades, las corporaciones empresariales, sindicales, gremiales, la Iglesia, los comités de todo tipo, etcétera, son copados y convertidos rápidamente por la política en espacios de representación, como ya lo vimos anteriormente.

En el campo dominante, tal como hemos intentado mostrar, la representación política, por el momento, ha sufrido un quiebre. En el campo popular, también, se dan nuevas formas de representatividad y de expresión política. La mayoría de los grupos sociales se han "separado" de sus partidos tradicionales a los que no reconocen como "expresión propia de sus clases o fracciones de clase" y el Estado, él mismo presentando grandes dosis de difusividad y ubicuidad, se ve en grandes problemas para funcionar como cohesionador y organizador de hegemonía y dirección política.

La lectura de esta semiología política nos lleva a visualizar el hecho de que el "frente agrario" no obstante predominar en la economía, está incapacitado, cada vez más, de imponer a la sociedad salvadoreña un orden político que lo "expresare legítimamente y lo reproduzca" como generador

de hegemonía indiscutible. Hay síntomas de “crisis en la cumbre” (entre el “frente agrario”, el grupo industrializante y el Estado), pero el proceso mismo no ha avanzado lo suficiente para mostrar los límites reales y los alcances de tal “crisis”, si es que las determinaciones estructurales de ambos grupos permiten un avance más profundo de tales síntomas. Hay “crisis de representación a través de los partidos políticos”. Es posible observar las nuevas redistribuciones de representación que tienen lugar entre clases y partidos o en las “organizaciones populares” (más claramente en el campo popular, que en el dominante), se da una situación de crisis económica profunda, y podemos constatar una “crisis en la base” marcada por la entrada de las masas “anteriormente pasivas” a la escena política con altos grados de autonomía. Es posible observar, también, que estos síntomas tienen gran relación con el fortalecimiento de la “burocracia militar”, de la “Iglesia” y de muchos otros “organismos de la sociedad civil”. Esto, creemos son manifestaciones de una crisis de hegemonía, una crisis de autoridad específicamente, en la que ningún grupo puede dirigir políticamente al resto de la sociedad. Es una crisis del Estado y de las formas de dominación hasta ahora empleadas, pues las masas populares y otros grupos subordinados se resisten a aceptarlas como legítimas pero sin poder sustituirlas definitivamente. La clase dominada no puede aprovechar la crisis en su propio beneficio pues los distintos grupos que la constituyen no han desarrollado la capacidad de ligar sus luchas a la mayoría de explotados, de desarrollar alianzas a largo plazo ni de generar organizaciones que les permitan convertirse, por el momento, en alternativa de poder.

En forma contraria, la actual crisis abre un periodo de probable unificación de la clase dominante. El Estado ha propuesto un Foro para discutir “las crisis” económica, política, moral y cultural del país y ha llamado selectivamente a los grupos que cree pueden participar para sus soluciones excluyendo, desde el principio, a los que han movilizado directamente las últimas coyunturas. La medida de llamar al Foro pareciera el intento del Estado por recobrar su *status* arbitral y de reanimar su desgastada y desacreditada representatividad ante las distintas fracciones dominantes. Es un intento de redefinir las relaciones normales entre la sociedad y el Estado, de relegitimar las reglas olvidadas del juego y de establecer el anterior sistema de los partidos políticos, para lo cual las elecciones coincidentes con esa crisis desempeñan un papel de primer orden.

El Estado busca nuevas y/o antiguas bases de apoyo ante la incapacidad objetiva de seguir financiando el desarrollo económico y de continuar controlando con efectividad el proceso político de la clase dominante y ante la imposibilidad de resolver los problemas en el campo popular. Las medidas adoptadas están muy lejos de solucionar el verdadero problema. Por un lado, se visualiza la represión como medida para resolver el *impasse* político, por otro, se plantean salidas cuasi institucionales, de representatividad institucional restringida, soslayando la solución a peticiones con-

cretas de distribución económica y política que plantean la mayoría de las fuerzas políticas del país. La simple representación institucional de las diferentes fuerzas en el interior del Estado no es solución para la crisis actual del país.

Las "organizaciones populares" (FAPU - BPR - LIGAS, etcétera) que tienen bajo su control importantes fuerzas sindicales y campesinas no han perdido su escepticismo por el actual orden político y, por el contrario, han reforzado sus acciones de hecho mientras la crisis económica se agudiza cada vez más hasta alcanzar niveles insospechados. Las fábricas siguen cerrando temporalmente sus departamentos, siguen expulsando obreros, cierran definitivamente. Campesinos, sacerdotes, obreros, estudiantes, profesores siguen siendo objeto de persecución, tortura y asesinatos por parte de grupos de derecha o cuerpos de seguridad, sin que esta situación parezca tener un fin, ni por lo menos, mediato. La Iglesia muestra expresiones que hacen pensar en la reconstitución unitaria de sus partes, debilitada desde hace cerca de tres años. La muerte de sacerdotes y de campesinos si bien es cierto que restituye su unidad, también refuerza su escepticismo ante las medidas gubernamentales para estabilizar la situación y mantiene su oposición beligerante ante el Estado. Pero, ahora, la Iglesia muestra posiciones más críticas ante ciertas actividades de las "organizaciones populares" que pueden tener hondas repercusiones en el interior de estas últimas.

Los partidos políticos mantienen una posición cauta y en ciertos casos hasta de rechazo a las propuestas de elecciones libres notándose que ciertos grupos industrializantes dejan ver cada vez más su simpatía por las soluciones políticas en las cuales los partidos se perfilan, todavía no es posible saber hasta qué punto, como instrumentos idóneos por la restructuración del orden perdido. Hasta ahora el Estado y el "frente agrario" parece que no han variado en sus posiciones. El Ejecutivo continúa impulsando el Foro Nacional, de donde cree podrán salir líneas de solución; continúa refiriéndose a las elecciones y promete medidas que pueden contribuir a la solución de la crisis, pero sin abandonar el esquema de la amenaza comunista y de la subversión internacional. El "frente agrario" continúa con sus campañas en contra de la Iglesia y en contra de la "revolución sandinista" que ve muy próxima a repetirse en el país. Refuerza, también, las campañas "antiterroristas", "anticomunistas" y comienza ya a atacar a ciertos partidos políticos. Los grupos armados, de izquierda y de derecha, continúan sus actividades clandestinas sin que pueda anticiparse una tregua de ningún lado.

La crisis económica continúa su paso rápido y devastador pero aún sin ser alcanzada por la crisis política, de tal manera que lleguen a calzar completamente. Sin embargo, los últimos conflictos laborales y políticos han agravado la situación y pueden impulsar con gran celeridad la crisis política hasta fusionarla con la económica y la resolución de los conflictos de nuestra sociedad tiende a plantearse en campos más allá de los políticos.